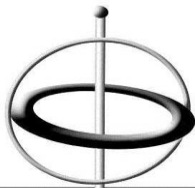


REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



TRIBUNAL SUPERIOR

Medellín

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL  
MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

|                  |  |
|------------------|--|
| PROCESO          | ORDINARIO APELACIÓN AUTO   |
| DEMANDANTE       | MARÍA VIRGELINA HURTADO MARÍN y LINA MARCELA BUSTAMANTE HURTADO  |
| DEMANDADOS       | MUNICIPIO DE BARBOSA, UNIÓN TEMPORAL JORGE CASTRILLÓN – DANILO GRISALES, JORGE HERNANDO CASTRILLÓN BUSTAMANTE, JAVIER DANILO GRISALES SAAVEDRA, SEGUROS DEL ESTADO S.A., SAMUEL ANDRÉS CASTAÑEDA OCAMPO y MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL ALTIPLANO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO – MASORA |
| RADICADO         | 05360-31-05-001-2021-00222-02  |
| ORIGEN           | JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CTO DE ITAGÜÍ  |
| TEMAS Y SUBTEMAS | EXCEPCIÓN PREVIA – PLEITO PENDIENTE  |
| DECISIÓN         | CONFIRMA   |

AUTO INTERLOCUTORIO No. 446

Medellín, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado el presente asunto en la SALA TERCERA DE DECISION LABORAL, según consta en Acta N° 035 de 2023, se procede a dictar AUTO INTERLOCUTORIO en orden a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** contra el Auto Interlocutorio del 7 de julio de 2023, proferido por el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGÜÍ dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES

Las señoras **MARÍA VIRGELINA HURTADO MARÍN** y **LINA MARCELA BUSTAMANTE HURTADO** presentaron demanda ordinaria laboral en contra del **MUNICIPIO DE BARBOSA, UNIÓN TEMPORAL JORGE CASTRILLÓN – DANILO GRISALES, JORGE HERNANDO CASTRILLÓN BUSTAMANTE, JAVIER DANILO GRISALES SAAVEDRA, SEGUROS DEL ESTADO S.A., SAMUEL ANDRÉS CASTAÑEDA OCAMPO** y **MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL ALTIPLANO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO – MASORA**, con el fin de que: **1)** Se declare la existencia de un contrato entre las demandadas y el señor **HÉCTOR DE JESÚS BUSTAMANTE SÁNCHEZ**. **2)** Seguidamente, pidieron declarar que el citado falleció en un accidente de trabajo, y a la fecha no han sido cancelados los salarios y prestaciones de la liquidación definitiva del contrato. **3)** En consecuencia, solicitaron que, en su calidad de compañera permanente e hija del causante, se disponga el pago en su favor de los conceptos salariales y prestacionales causados y que se adeudan en favor del trabajador fallecido, junto con la indemnización contenida en el artículo 65 CST. **4)** De otro lado, la señora **MARÍA VIRGELINA HURTADO MARÍN** pidió específicamente que se tuviera como beneficiaria del causante, y, por consiguiente, le fuese reconocida la pensión de sobrevivientes de origen profesional, al igual que los intereses moratorios reglados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en su defecto los intereses del artículo 1617 Código Civil (f. 6 a 21 Archivo 01 ED).

Notificados en debida forma los accionados, estos procedieron a contestar la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, con excepción de la **UNIÓN TEMPORAL JORGE CASTRILLÓN – DANILO GRISALES y JORGE HERNANDO CASTRILLÓN**, a la cual, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021 se le tuvo por no contestada la demanda (Archivos 19, 20, 21, 23, 24 y 36 ED).

Dentro de sus argumentos de defensa, la demandada **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** formuló la excepción previa de “**PLEITO PENDIENTE**”, fundamentada en que, de acuerdo con lo dicho en la demanda, actualmente cursa acción judicial entre las mismas partes ante el *Juzgado Veintisiete Administrativo Oral del Circuito de Medellín*, Rad. 05001-1333-027-2018-00280-00, con miras a esclarecer la causa del accidente ante la jurisdicción contencioso administrativa, a partir de lo cual la declaratoria de accidente laboral está indebidamente acumulada, debiendo rechazarse esta pretensión, analizándose igualmente la suspensión del proceso, ya que no puede olvidarse que la culpa patronal no es más que una responsabilidad civil contractual, y a esta aplican las causales exonerativas de responsabilidad debatidas en el pleito administrativo.

De igual forma, expuso que también se configuraba la “**FALTA DE COMPETENCIA**” en tanto se pretendía la declaratoria de contrato de trabajo, relación en la que se pide tener como empleadores a entidades públicas como **MUNICIPIO DE BARBOSA y MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL ALTIPLANO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO – MASORA**, motivo por el que debía remitirse el proceso a la Jurisdicción Contencioso Administrativa

Luego, invocó también las excepciones de “**NO HABERSE PRESENTADO PRUEBA DE LA CALIDAD DE HEREDERO, CÓNYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE, CURADOR DE BIENES, ADMINISTRADOR DE COMUNIDAD, ALBACEA Y EN GENERAL DE LA CALIDAD EN QUE ACTÚE EL DEMANDANTE O SE CITE AL DEMANDADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR**” y “**NO COMPRENDER LA DEMANDA A TODOS LOS LITISCONSORTES NECESARIOS**”. Frente a ello, sostuvo que no se advertía en el particular la prueba de la calidad en la que actuaban las demandantes (hija y compañera permanente), a fin de reclamar los derechos económicos generados en favor del trabajador fallecido, añadiendo que no se llamó como accionantes a otros herederos con igual o mejor derecho (f. 20 a 24 Archivo 19 ED).

Así mismo, el accionado **SAMUEL ANDRÉS CASTAÑEDA OCAMPO** propuso el medio dilatorio de “**PRESCRIPCIÓN**”, alegando que no había duda en torno a la fecha de exigibilidad de los derechos pretendidos, esto es, el 31 de marzo de 2017, fecha de fallecimiento del señor **HÉCTOR DE JESÚS BUSTAMANTE SÁNCHEZ**, y teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 151 CPLSS y 488 CST, al haber presentado la demanda el 23 de julio de 2021, operó la figura extintiva descrita, aun incluyendo el periodo de suspensión por efectos de la pandemia (f. 7 a 11 Archivo 24 ED).

El extremo demandante reformó la demanda adicionando el acápite probatorio (Archivo 25 ED). Frente a esta, solo acudieron a pronunciarse la **UNIÓN TEMPORAL JORGE CASTRILLÓN – DANILO GRISALES y SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, teniéndose por no contestada la reforma por parte de los demás accionados (Archivos 36 y 43 ED).

De otro lado, el apoderado del **MUNICIPIO DE BARBOSA** llamó en garantía a la demandada **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, admitido por el Juzgado, y frente al cual aportó contestación la entidad de seguros en comento (Archivos 22, 36 y 41 ED).

### PROVIDENCIA APELADA

En audiencia de que trata el artículo 77 CPLSS, en la etapa pertinente, a través de Auto del 7 de julio de 2023, la Juzgadora de conocimiento declaró no probadas las excepciones propuestas por **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y dispuso decidir de fondo la prescripción formulada por el accionado **SAMUEL ANDRÉS CASTAÑEDA OCAMPO**.

Para arribar a esta decisión, comenzó por explicar frente a la falta de jurisdicción y competencia esbozada, que conforme el artículo 2° CPLSS, las controversias suscitadas en torno

al contrato de trabajo, deben ser conocidas por la Jurisdicción Ordinaria Laboral, por lo que, al alegarse en la demanda que los empleadores son personas regidas por el derecho privado, es dable colegir la existencia de una relación de trabajo que excluye del conocimiento de este por la Jurisdicción Contenciosa que conoce precisamente de lo dispuesto en el artículo 132 CPACA.

En cuanto a la falta de prueba de la calidad en que actúan las accionantes, dijo que en lo atinente a la señora **MARÍA VIRGELINA HURTADO MARÍN**, que adujo ser compañera del fallecido, este era un punto a analizar en el litigio, debiendo aquella acreditar su condición de beneficiaria para acceder a la pensión reclamada, aspecto que no está atado a tarifa legal de prueba.

Luego, en lo referente a la excepción de *pleito pendiente*, propuesta con base en proceso de reparación directa del Estado, señaló que este tiene un objeto distinto en el presente litigio, en el que no se requiere un pronunciamiento previo para resolver la discusión propuesta en esta sede, donde se controvierte la responsabilidad objetiva derivada del accidente laboral sufrido por el fallecido, y si esta recae sobre quienes son señalados como empleadores del fallecido, de manera que un eximente de responsabilidad en el proceso citado que favorezca los intereses de las entidades públicas, en nada incide en las resultas del actual litigio, en la medida que, insistió, no se busca la responsabilidad subjetiva, sino de las circunstancias que requieren ser cubiertas por los empleadores, y solidariamente por los demás demandados.

Acto seguido anotó que, no había una falta de integración del litisconsorcio necesario, toda vez que la prueba adosada, arrimada igualmente al expediente del proceso administrativo promovido paralelamente, se extrae que quien también funge como demandante en aquel litigio, no es hijo del fallecido, y de considerarse como hijo de crianza, al momento del deceso del trabajador, contaba con 35 años de edad, lo que quiere decir que estaba excluido de la posibilidad de ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes materia de estudio. Tampoco accedió a la vinculación del fondo de pensiones y ARL, dado que lo que se alega por la parte accionante es la omisión en la afiliación al sistema de pensiones, lo que subrogaría en el empleador la asunción del riesgo como tal.

Por último, atisbó que al estar en discusión la procedencia de derechos prestacionales y pensionales, lo procedente es realizar el estudio de la prescripción propuesta como excepción de fondo, por lo que dejó su definición para el momento del fallo.

### RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la sociedad **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** apeló la decisión en punto a la negativa de la excepción de *pleito pendiente*, argumentando que dentro de las pretensiones se reclama la indemnización de perjuicios derivada de la existencia de culpa patronal, pretensión que se tramita justamente ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que tiene sentencia de primera instancia favorable a los intereses de los demandados de ese proceso. De ahí que, reiteró, los pedimentos descritos no pueden ser resueltos en esta litis.

A la inconformidad descrita adhirieron los apoderados de **SAMUEL ANDRÉS CASTAÑEDA OCAMPO, MUNICIPIO DE BARBOSA, la UNIÓN TEMPORAL JORGE CASTRILLÓN – DANILO GRISALES y JORGE HERNANDO CASTRILLÓN y MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL ALTIPLANO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO – MASORA** (Archivo 63 ED).

La Juez de primer grado concedió la apelación propuesta.

### ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

A través de Auto de Sustanciación 26 de septiembre de 2023, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, habiendo presentado los mismos los apoderados de la parte **DEMANDANTE** y de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, así:

El apoderado de la parte DEMANDANTE señaló que, debía confirmarse la decisión emitida por el *A quo* como quiera que dentro de las pretensiones del proceso no se invoca ninguna situación relacionada con culpa patronal como lo quiere hacer ver quien propone la excepción de pleito pendiente, como quiera que lo deprecado versa sobre el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, liquidación de prestaciones sociales e indemnizaciones moratorias, pretensiones totalmente distintas a las que se persiguen en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (Archivo 03 ED Tribunal).

Por su parte el apoderado de SEGUROS DEL ESTADO S.A., sostuvo que debe revocarse la decisión de Primera Instancia pues está acreditado debidamente por el extremo pasivo que dentro de proceso radicado 2018-00280 tramitado por el Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Medellín, se profirió sentencia 003 del 01-03-2023, en el sentido de declarar probada la CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA despachándose desfavorablemente las pretensiones de dicha acción, proceso con igual identidad de sujetos dentro del pleito que ahora convoca la atención de la Sala, recalcando que se encuentra pendiente el trámite de segunda instancia en el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia.

Adicional a ello, debe tenerse en consideración que es la propia parte demandante al reformar su demanda, la que solicitó una prueba adicional consistente en que se decrete como prueba trasladada unos interrogatorios de parte practicados en el curso de otro proceso judicial que cursa en el Juzgado 27° Administrativo de Medellín por hechos que guardan estrecha relación con los que se debaten en este proceso, lo cual claramente funda y soporta la excepción propuesta (Archivo 04 ED).

### PROBLEMA (S) A RESOLVER

El problema jurídico se centra en establecer si acertó el Juez de primera instancia al declarar no probada la excepción de pleito pendiente, propuesta como previa por la demandada **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

### CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que en atención a lo reglado en el numeral 3° del artículo 65 del CPTSS, según el cual el auto que decida sobre excepciones previas es susceptible del recurso de apelación, esta Sala de Decisión es competente para dirimir el presente asunto, para lo cual, se seguirán los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPTSS, es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

La disyuntiva que se plantea tiene su génesis en la decisión del Juzgado de primera instancia al negar la prosperidad de la excepción contemplada en el numeral de 8° del artículo 100 CGP que reza: “*Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto*”, sustentada en que, a pesar del proceso de reparación directa que las aquí demandantes tramitan en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en contra de quienes integran el extremo pasivo en esta contienda, en el presente asunto se discute la responsabilidad objetiva derivada del accidente y el contrato de trabajo en el que estuvo inmiscuido el causante, y si hay lugar a condenar por este motivo a quien fungió como empleador al pago de salarios y prestaciones pendientes de cancelar, y la pensión de sobrevivientes por riesgo laboral.

Frente a la anterior conclusión, se duele el apoderado judicial de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, coadyuvado por los demás accionados, aludiendo que dentro de las pretensiones del gestor se reclama el pago de la indemnización de perjuicios derivada de la existencia de culpa patronal, lo cual también constituye una pretensión en el trámite seguido en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, lo que impide su resolución en el presente proceso.

Pues bien, para desatar esta disyuntiva, huelga precisar que, del tenor literal de la normativa en comento, la intelección primaria que surge de este permite establecer que el objeto principal de la excepción previa es evitar la existencia de dos (2) o más juicios con idénticas pretensiones y entre las mismas partes, y, por otra parte, evitar sentencias contradictorias.

Por lo tanto, dicho instituto procesal requiere para su configuración algunos elementos concurrentes y simultáneos, tales como: **1)** otro proceso en que se encuentre en trámite; **2)** Que las pretensiones sean idénticas, **3)** Que las partes sean las mismas, y que exista identidad de causa porque los procesos se soporten en unos mismos hechos. De esta manera, la ausencia de alguno de los anteriores elementos, acarrea de contera la inoperancia de la figura de pleito pendiente.

Ahora, sobre el instituto estudiado, se ha resaltado por la doctrina<sup>1</sup> en primer lugar, que debe tratarse de procesos en curso, porque de otra forma se estaría ante un evento de *cosa juzgada*; y recalca igualmente, en la necesaria identidad de los tres supuestos que identifican plenamente que se está en presencia de una misma causa, pues de lo contrario, cualquier variación en estos, desconfigura la excepción:

*“(…) es necesario que los dos procesos estén en curso, es decir, que no haya terminado ninguno de ellos, pues si tal cosa ha ocurrido respecto de uno de ellos, la excepción ya no es previa sino perentoria y se denomina cosa juzgada. **Las partes deben ser unas mismas, porque se hay variación de alguna de ellas, ya no existirá el pleito pendiente; las pretensiones deben ser idénticas a las presentadas en el otro proceso, porque si son diferentes, así las partes fueren unas mismas, tampoco estaríamos ante ‘pleito pendiente, como igualmente no lo habría si los hechos son diversos por cuanto significaría lo anterior que varió la causa que determinó el segundo proceso.**”*

(…)

*La Corte ha fijado un práctico criterio para decidir si puede hablarse de pleito pendiente y dice que existirá cuando “el fallo en uno de los juicios reduzca la excepción de cosa juzgada en el otro”, o sea, que cuando haya duda, puede le juez aplicar el criterio indicado y hacer de cuenta que la sentencia que se podría dictar fue proferida no aceptando las pretensiones del demandante y, luego de esta elaboración mental, adecuar el contenido de ese fallo imaginado, a fin de determinar si cabe la excepción de cosa juzgada (…)*”. (Subraya y Negrilla de la Sala).

En esa misma dirección, otro reconocimiento doctrinante, en su obra<sup>2</sup>, precisó:

*“(…) el análisis de esta excepción previa implica que el juez debe realizar una comparación entre las pretensiones formuladas en ambos procesos, es decir, debe confrontar las pretensiones del proceso ya promovido con anterioridad con las del nuevo proceso en el que se está formulando la excepción, para verificar si existe coincidencia entre las partes, entre el objeto de la pretensión y entre su causa. Si llega a la conclusión de que existe identidad entre ambos procesos, deberá declarar probada la excepción y en consecuencia ordenar la terminación del proceso (…)*.

**Se exige entonces un análisis exhaustivo de las denominadas “identidades procesales”, para determinar si, en realidad, se trata de un mismo litigio, y por eso, de mantenerse los dos procesos, se corre el riesgo de que exista frente a un mismo asunto dos sentencias que podrían incluso ser contradictorias (…)**”. (Subraya y Negrilla de la Sala).

De acuerdo con los presupuestos descritos, la parte recurrente insiste en la configuración del *pleito pendiente* devenida del objeto del presente proceso, en comparación con el *medio de control de reparación directa* promovido por las demandantes en contra del **MUNICIPIO DE BARBOSA, UNIÓN TEMPORAL JORGE CASTRILLÓN – DANILO GRISALES, JORGE HERNANDO CASTRILLÓN BUSTAMANTE, JAVIER DANILO GRISALES SAAVEDRA y SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, conocido por el **JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, Rad. 05-001-3333027-2018-00280-00.

<sup>1</sup> Pág. 956-957. Código General del Proceso, Parte general, Hernán Fabio López Blanco, Dupre Editores, 2017.

<sup>2</sup> “Derecho Procesal Civil General”, Universidad Externado – 2021, Henry Sanabria Santos

En ese contexto, al efectuar el estudio comparativo entre el citado proceso y el conocido por esta Jurisdicción, conforme las copias de las piezas procesales informales del litigio seguido ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (f. 341 a 392 Archivo 05 ED), lo primero que emerge es la existencia de identidad de partes, en la medida que, en ambos litigios el extremo demandante está integrado por **MARÍA VIRGELINA HURTADO MARÍN y LINA MARCELA BUSTAMANTE HURTADO**. Luego, en la orilla demandada participan el **MUNICIPIO DE BARBOSA, UNIÓN TEMPORAL JORGE CASTRILLÓN – DANILO GRISALES, JORGE HERNANDO CASTRILLÓN BUSTAMANTE, JAVIER DANILO GRISALES SAAVEDRA y SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

Frente al sustento o causa de los pedimentos, en los procesos descritos está cimentada en síntesis en los siguientes supuestos (f. 6 a 21 Archivo 01 ED y f. 341 a 392 Archivo 05 ED):

- El Contrato de Obra Pública N° 00332 suscrito entre el **MUNICIPIO DE BARBOSA** y la **UNIÓN TEMPORAL JORGE CASTRILLÓN – DANILO GRISALES**, el cual tenía como objeto la construcción de viviendas de interés prioritario en el citado ente territorial, sector “Las Cuchillas” de la vereda “Barrios de Jesús”.
- Que, en virtud del contrato en mención, la **UNIÓN TEMPORAL JORGE CASTRILLÓN – DANILO GRISALES** contrató al señor **HÉCTOR DE JESÚS BUSTAMANTE SÁNCHEZ** para ejercer labores de ayudante de obra, funciones que inició el 27 de marzo de 2017, relación en vigencia de la cual, el 31 de marzo de esa anualidad, se presentó deslizamiento de tierra en la obra, percance en el que lamentablemente perdió la vida. Durante la duración del citado contrato, se aduce en las demandas que el fallecido no fue afiliado al sistema de seguridad social.

A grandes rasgos, los supuestos facticos que anteceden son el basamento principal en el cual se apalancan las aspiraciones en cada uno de los asuntos referidos, mismas que pasan a detallarse a continuación.

En el proceso seguido ante el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellín (Reparación Directa), Rad. 05-001-3333027-2018-00280-00 (f. 341 a 392 Archivo 05 ED), se plantearon como pretensiones:

*“(…) 1. Se declare administrativa y solidariamente responsables a las personas demandadas por el daño antijurídico que sufrieron los demandantes con ocasión al fallecimiento del señor Héctor de Jesús Bustamante Sánchez, el día 31 de marzo de 2017 cuando fue sepultado por un talud de tierra mientras se encontraba laborando en el municipio de Barbosa en la obra denominada Diego Fernández Barbosa (…).”*

Con base en los anterior, solicitaron el reconocimiento de: Perjuicios materiales (daño emergente, lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro) y Perjuicios morales.

En el proceso ordinario laboral de primera instancia tramitado ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí f. 6 a 21 Archivo 01 ED, el acápite pretentivo contiene lo siguiente:

*“(…) PRIMERO: Se declare que entre el señor HÉCTOR DE JESÚS BUSTAMANTE SÁNCHEZ y los demandados existió un contrato de trabajo.*

*SEGUNDO: Se declare que la muerte del señor HÉCTOR DE JESÚS BUSTAMANTE SÁNCHEZ ocurrió producto de un accidente de trabajo.*

*TERCERO: Se declare que a la fecha de la sentencia no se han cancelado los salarios y liquidación definitiva de prestaciones sociales que dejó causada el señor HÉCTOR DE JESÚS BUSTAMANTE SÁNCHEZ.*

**CUARTO:** *Se declare que la señora MARÍA VIRGELINA HURTADO MARÍN es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con ocasión de la muerte de origen profesional del señor HÉCTOR DE JESÚS BUSTAMANTE SÁNCHEZ.*

**Como consecuencia de lo anterior se condene a todos los demandados de manera solidaria:**

**QUINTO:** *Al pago de salarios y prestaciones sociales a favor de las señoras MARÍA VIRGELINA HURTADO MARÍN y LINA MARCELA BUSTAMANTE HURTADO.*

**SEXTO:** *Al pago de la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por no pago oportuno de las prestaciones sociales a favor de las señoras MARÍA VIRGELINA HURTADO MARÍN y LINA MARCELA BUSTAMANTE HURTADO.*

**SÉPTIMO:** *Al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora MARÍA VIRGELINA HURTADO MARÍN, incluidas las mesadas adicionales de cada año, desde el momento del fallecimiento del señor HÉCTOR DE JESÚS BUSTAMANTE SÁNCHEZ.*

**OCTAVO:** *Al reconocimiento y pago del interés moratorio sobre el pago de las mesadas adeudadas a la señora MARÍA VIRGELINA HURTADO MARÍN, al tenor de lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio los intereses legales del artículo 1617 del C.C. o la indexación. (...)”.*

Visto lo anterior, para esta Corporación resulta palmario que, en el asunto en cuestión, como lo determinó el *A quo*, no se configura la excepción de *pleito pendiente*, pues más allá de que haya identidad de partes y causa, la naturaleza y objetivos de las pretensiones blandidas en uno y otro proceso son totalmente distintas.

Ello es así, para decirlo sin ambages, porque, como puede verse, en la controversia conocida por el *Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellín*, la parte demandante persigue la reparación de un determinado grupo de perjuicios, devenido según considera, del actuar de las demandadas y su responsabilidad en torno a las circunstancias en las que el señor HÉCTOR DE JESÚS BUSTAMANTE SÁNCHEZ perdió la vida en una obra pública contratada entre el **MUNICIPIO DE BARBOSA** y la **UNIÓN TEMPORAL JORGE CASTRILLÓN – DANILO GRISALES**, para lo cual, según se extrae del escrito de demanda, combina conceptos de la culpa patronal y la responsabilidad del Estado ante el daño sufrido por las accionantes.

No obstante, contrario a lo señalado por el recurrente, las pretensiones descritas no tienen similitud con lo reclamado ante la Justicia Ordinaria, pues nótese que, delimitado como aparece en los supuestos facticos que el empleador del causante fue la **UNIÓN TEMPORAL JORGE CASTRILLÓN – DANILO GRISALES**, y que por virtud de la relación jurídica con esta, las demás accionadas son responsables solidarias de las condenas que puedan fulminarse en contra de aquella, o están llamadas a responder por estas en virtud de un contrato de seguros que amparó la ejecución del contrato de obra pública mencionado, las accionantes reclaman exclusivamente el pago de **salarios, prestaciones sociales, indemnización moratoria y la pensión de sobrevivientes**, obligaciones predicadas en el marco de la relación laboral del fallecido con la citada UT, de la que también piden su declaración, súplicas que, en atención a lo establecido en el artículo 2 CPLSS, por tratarse de una controversia directamente derivada del contrato de trabajo, es competencia del Juez Laboral del Circuito.

Quiere decir lo anterior que, en parte alguna de la demanda ordinaria laboral y mucho menos en su reforma (Archivo 25 ED), como erradamente lo adujo el apelante, la parte reclamante pregona la existencia de culpa patronal y el resarcimiento de perjuicios que pudiera confundirse con la reparación ventilada ante el Juez Administrativo, sino, reitérese, el cumplimiento de las obligaciones salariales, prestacionales y de seguridad social surgidas de la relación obrero-patronal, así como la sanción derivada del incumplimiento de estas, sin incluir allí la verificación de la responsabilidad subjetiva a cargo del empleador en el insuceso sufrido,

conforme lo establecido en el artículo 216 CST, situación que no impide tramitar la actual controversia hasta su finalización, pues en modo alguno, en atención a los límites que enmarcan cada discusión, encuadrarían eventualmente en sentencias contradictorias, ello como consecuencia de la falta de identidad de las pretensiones.

Así las cosas, comparte la Corporación la declaración de improperidad del medio dilatorio propuesto por la pasiva, debiendo confirmarse la decisión recurrida. Las costas en esta instancia estarán a cargo de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a medio (1/2) SMLMV.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN,**

**R E S U E L V E**

**PRIMERO: CONFIRMAR** el Auto del 7 de julio de 2023 proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí.

**SEGUNDO:** Las **COSTAS** de esta instancia están a cargo de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a medio (1/2) SMLMV.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Los Magistrados,

  
**MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –  
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 187 del 01 de noviembre de 2023

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>